

Bogotá, D.C. 29 MAYO 2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
29/MAYO/2019 FOLIOS: 4 ANEXOS: 0 FOLIOS UTILES

AL CONTESTAR CITE: 8140-E2-001247

TIPO DOCUMENTAL: OFICIO

REMITE: OFICINA ASESORA JURIDICA

DESTINATARIO: OSWALDO MATEUS MOSQUERA

Señor
OSWALDO MATEUS MOSQUERA
Calle 40 No. 27^a – 22
Bucaramanga - Santander

Referencia: Concepto Autoridad Ambiental urbana. Radicado 6135 de 2019.

En atención a su solicitud de concepto, nos permitimos dar respuesta de manera general y abstracta en los siguientes términos:

En primer lugar, es importante indicar que el artículo 319 de la Constitución Política dispuso lo relacionado con las Áreas Metropolitanas en los siguientes términos:

“ARTICULO 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.

La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios.

Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo con la ley.

Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley."

Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley 1625 de 2013 estableció el Régimen aplicable a las Áreas Metropolitanas cuyo artículo 2 definió estas como "... *entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada*".

Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 1625 de 2013 dispuso las funciones que le corresponden a las Áreas Metropolitanas que entre otras, le corresponde "Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993"

Ahora bien, es importante indicar que las disposiciones de la Ley 1625 de 2013 no puede ser vista a parte de las demás disposiciones que sean aplicables, en este sentido, para el tema de Autoridades Ambientales Urbanas es necesario aplicar lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, esto es tan claro que el numeral citado en el párrafo anterior hace un llamado expresa a esta ley.

En este sentido, es procedente citar lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 para la constitución de una autoridad ambiental urbana, en este sentido los artículos 55 y 66 de esta ley señalan:

"ARTÍCULO 55. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS GRANDES CIUDADES. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente." (Subrayado fuera de texto)

"ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y



autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento.” (Subrayado fuera de texto)

Con base en lo anterior, podemos indicar que la Ley 99 de 1993, ley especial en materia ambiental, exige el cumplimiento del número de población igual o superior al millón de habitantes para que las Áreas Metropolitanas ejerzan las funciones y competencias en el medio ambiente urbano como Autoridad Ambiental. En otras palabras, el Área Metropolitana o ente territorial que no cumpla con este requisito poblacional, no podrá ejercer las funciones de autoridad ambiental urbana.

En apoyo de lo anterior, nos permitimos citar lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del año 2018 en la cual consideró:

*“Para que las Áreas Metropolitanas puedan ser competentes para ejercer dentro de su perímetro urbano las funciones descritas en los artículos 55 y 66 de la ley 99 de 1993, y se les destine el cincuenta por ciento (50%) de la sobretasa ambiental, deben cumplir con el requisito de tener una población urbana igual o superior a 1.000.000 de habitantes, de acuerdo con el resultado del censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 1985, el cual sí fue adoptado para todos los efectos constitucionales y legales por el congreso de la república.
(...)”*

De acuerdo con las disposiciones antes transcritas, fluye con claridad que para que las áreas metropolitanas sean competentes para ejercer, dentro de su perímetro urbano, las funciones descritas en los artículos 55 y 66 de



El ambiente
es de todos

Minambiente

la Ley 99, esto es, otorgar licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones, así como las mismas atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, deben cumplir con el requisito de tener una población urbana igual o superior a 1.000.000 de habitantes.”¹

Así las cosas, el cumplimiento del requisito dispuesto por la Ley 99 de 1993 es indispensable para que las Áreas Metropolitanas ejerzan las funciones y competencias de Autoridad Ambiental Urbana, sin ser suficiente lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013.

Ahora bien, en el caso que fue objeto de estudio por el Honorable Consejo de Estado, se determinó que el Área Metropolitana de Bucaramanga no cumplió con el requisito de población para ejercer como autoridad ambiental urbana y por lo tanto decretó la nulidad del acuerdo metropolitano que los constituyó como tal, dejando así este ente territorial sin funciones de autoridad ambiental.

Sin perjuicio de lo anterior, esta determinación depende en su totalidad de la firmeza del fallo del Consejo de Estado, para lo cual le recomendamos acudir a este alto tribunal para que en el marco de sus competencias entregue la información relacionado con la actualidad de este proceso.

Atentamente



CLAUDIA ADALGIZA ÁRIAS CUADROS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Andrés Felipe Bermont Barrera
Revisó: Claudia Fernanica Carvajal Miranda

¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Expedientes Acumulados Nros. 68001-23-33-000-2012-00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001-23-33-000-2012-00199-00, 68001-23-33-000-2012-00205-00, 68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-00348-00. Bogotá 21 de junio de 2018.